

Marco Político.

Pandemia y consecuencias

En el escenario inusual de una pandemia global, se va desarrollando la coyuntura económica internacional, donde como nunca se están manifestando las consecuencias del proceso de globalización capitalista.

La parálisis económica de los países, producto del confinamiento es generalizada, y la posibilidad de recuperación quedó atada a la vacunación de la población. Ello desató la guerra comercial mundial, por la apropiación de vacunas.

Se ve con claridad la restricción que significa el sistema de patentes en los medicamentos, para poder distribuir en forma equitativa las dosis de vacunas.

Los laboratorios, movidos por el espíritu de lucro, abastecen a los países dominantes, resaltando con crudeza la desigualdad de las poblaciones generada por el proceso de concentración de la riqueza. Esta situación, pone en discusión la propiedad privada de la salud pública.

La derrota electoral de Trump en Estados Unidos, y el desastre generado por Bolsonaro en Brasil, ambos militantes del darwinismo social, propiciando que sobrevivan los más aptos, significó el sacrificio de miles de vidas, un verdadero genocidio, puesto que sus políticas anti-cuarentena demoraron la atención sanitaria en sus países.

Las consecuencias geopolíticas de estos acontecimientos se manifiestan en el fortalecimiento de las reacciones populares en América Latina, donde aparece un polo creciente de países con posiciones que cuestionan el neoliberalismo.

Cuba, Venezuela, México, Argentina y Bolivia, a los cuales se sumarán Ecuador y Brasil en las próximas elecciones, así como el referéndum que aprobó modificar la Constitución en Chile y

la rebelión popular en Perú, presagian la reconstitución del proceso de unidad de la Patria Grande Latinoamericana.

Esta situación geopolítica se fortalece con la perspectiva de alianza con China y Rusia. Habrá más grados de libertad para intentar procesos de desconexión hacia un mundo post capitalista.

Marco interno

Con el objeto de mostrar un indicador sistemático que permita vislumbrar el éxito o el fracaso de las políticas públicas que inciden sobre los sectores sociales vulnerables de la Argentina es que presentamos en el **Estudio 1** el "Índice de Vulnerabilidad Social".

En el **Estudio 2** se analiza la negociación con el FMI, donde se presenta con claridad la imposibilidad de pago de los vencimientos de los próximos dos años, y en consecuencia se abre un capítulo inédito a nivel mundial: Si el FMI no modifica su política de condicionalidad a los países deudores hay una alta probabilidad de que se inicie un proceso judicial internacional, donde deberían quedar imputados las autoridades del FMI que dieron el préstamo ilegal al gobierno de Macri, así como los funcionarios argentinos que lo aceptaron.

El segundo gran problema se da respecto a los formadores de precios. Se nota el descontrol en el impacto del índice de pobreza, que alcanzó el 42 %. La gravedad de la situación social de la Argentina no es novedad. Los últimos datos de INDEC, impactan, pero no sorprenden. El agravamiento de la crisis que trajo aparejada la pandemia del COVID-19, que llevaba años, implicó un nuevo retroceso en las condiciones de vida de la población. En el **Estudio 3** se presenta una imagen ampliada de cómo se encuentran los salarios y las condiciones de empleo según cada sector económico, para pensar un mercado de trabajo heterogéneo con serias dificultades de recomposición en el corto plazo

Con el objetivo de ir aproximando una visión sobre perdedores y ganadores en la pandemia presentamos el **Estudio 4** "Impacto económico sectorial del covid-19". Los resultados permitirán diferenciar las políticas tributarias y de asistencia.

Lo grave en Argentina es que está judicializada la política de Estado. Todas las medidas corren el riesgo de terminar en apelaciones a la justicia, dominada en su estructura jerárquica por los cómplices en la persecución a los líderes populares de América Latina. La definición de la batalla judicial contra el Lawfare, depende la concreción de los objetivos de las políticas de estado encaradas.

Esta certeza produjo la renuncia de la Ministra de Justicia Marcela Lozardo, y su reemplazo por Martín Soria, diputado comprometido con la modificación del sistema judicial.

La esperanza de que se generara un proceso de autodepuración se terminó. La visión de que los buenos modales con la oposición son receptados como manifestaciones de debilidad está modificando la forma de encarar la agenda política.

La reforma judicial pendiente debería ser el inicio de una gestión con más convicción en la utilización del poder delegado en las urnas.